

ALGO MÁS QUE VENTANALES ROTOS

Sergio Ramírez

Escritor

No pocas veces toca explicar la situación presente de Nicaragua en foros públicos internacionales, entrevistas de prensa, y aún entre amigos siempre deseosos de saber qué fue de aquella revolución de hace tres décadas, la última del siglo en América Latina. Es mi experiencia cada vez que me toca viajar.

Generalmente se entiende como un asunto de sueños traicionados, para quienes vivieron y acompañaron aquella gesta, y para otros, que toman en cuenta la democracia como un asunto esencial en nuestro destino futuro, de autoritarismo a la moda, en lo que la persona de Daniel Ortega no vendría a ser el único, y excesos de corrupción de los que ahora se repiten como una plaga a lo largo del continente.

Nada particular entonces. Los decorados extravagantes que enmarcan las comparencias del líder supremo, sus estilos histriónicos frente a las cámaras, la multiplicación de sus efigies gigantes en calles y plazas, la pirotecnia populista de sus discursos, también se repiten allende las fronteras de Nicaragua, país donde no se han inventado sino más bien se copian, y el padre reconocido de esta nueva manera de gobernar desde las tarimas y por encima de las instituciones, que poco vienen a importar, no es Ortega, sino Chávez. Por tanto, la atención pública internacional en quien se centra es en este último, verdaderamente poderoso porque tiene las llaves de las fuentes de petróleo, con lo que los padecimientos democráticos de Nicaragua pasan al tercer plano, y no suelen atraer a los reflectores.

Un caso de tercera en el tercer mundo, que salta a veces a las primeras planas si se trata de una fotografía en la que un enmascarado dispara el cañón de un mortero casero hacia las ventanas del hotel *Holiday Inn* en Managua, como la que apareció hace algunas semanas en la portada del *Wall Street Journal* en ocasión de los disturbios callejeros protagonizados por turbas al servicio del partido oficial, porque se trata de un icono sagrado, igual que los restaurantes *McDonald* o los almacenes *Wal-Mart*.

Estas agresiones, orquestadas desde los ámbitos del poder para hacer valer la imposición inconstitucional de Ortega de prolongar la permanencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia a quienes se habían vencido sus períodos, se han repetido cada vez que se las juzga necesarias para dar la impresión, cada vez menos creíble y desgastada, de que el pueblo está en las calles en respaldo de medidas revolucionarias de interés popular. Y cuando dejan de ser necesarias, cesan, para volver a repetirse según conveniencia.

El alejamiento que hay fuera de Nicaragua del verdadero sentido de estos mecanismos inspirados en la idea de imponer el terror, mientras la policía es obligada a permanecer pasivamente al margen, hace que en las oficinas de los organismos internacionales, empezando por la OEA, y en no pocas cancillerías, incluyendo las europeas y el Departamento de Estado, se llegue a la tranquilizadora conclusión de que se trata nada más de disturbios aislados, después de los cuales todo regresa otra vez a la normalidad.

Nada menos cierto. No hay normalidad en Nicaragua, ni institucional ni democrática, ni en lo que se refiere al respeto de los derechos políticos de los ciudadanos, y las violaciones a la Carta Democrática de la misma OEA están asentadas en los actos de violencia en contra de la Constitución Política y de las leyes. Para empezar, la sentencia emitida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia leales a Ortega, que declara inconstitucional el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección al presidente de la república, seguida por el decreto del propio Ortega, ya mencionado, que manda prorrogar no sólo los períodos de los magistrados de la Corte Suprema, sino también de los magistrados

electorales y de los contralores, atribución que corresponde de manera exclusiva a la Asamblea Nacional. Este decreto fue, a su vez, convalidado por esos mismos magistrados de la Corte Suprema, fieles a Ortega.

En esas conversaciones allende las fronteras de que hablaba al principio, suele haber alguien que expresa la esperanza de que todas estas pesadillas terminarán pronto, desde luego hay elecciones presidenciales en 2011, en apenas un año, cuando también será renovada la Asamblea Nacional. Tendremos entonces la oportunidad de elegir libremente un nuevo gobierno, y Daniel Ortega será un asunto de la historia pasada.

El asunto está en que realmente tengamos esa oportunidad. En lo que toca al propio Ortega su decisión es presentarse como candidato, por mucho que la Constitución se lo prohíba, y ganar las elecciones a cualquier coste, con los votos contados por los mismos jueces electorales que cometieron el fraude en las elecciones municipales de 2008, y por eso mismo es que ha dispuesto por decreto que permanezcan en sus puestos.

Y no se trata simplemente de una reelección más. La sentencia ilegal de sus magistrados de la Corte Suprema permite una reelección presidencial para siempre, en consonancia con la estrategia electoral del partido en el poder, definida en documentos que se han hecho públicos, en donde se afirma sin sonrojos que han llegado para quedarse, y que no están dispuestos a renunciar al gobierno bajo ningún circunstancia.

Ortega controla, además, a los jueces y magistrados de los tribunales en todos los niveles, organizados en sindicatos militantes, los mismos que estuvieron en las calles cuando fue atacado el *Holiday Inn*; controla a los jueces del Tribunal Electoral, y controla a los contralores que se supone deben detener los actos de corrupción. Y quiere, además, controlar a la Policía Nacional y al Ejército, y ha empezado ya con la Policía, instituciones que hasta ahora se ha regido al amparo de la Constitución, y por eso han sido respetadas por los ciudadanos.

El panorama se torna, sin embargo, más complejo, si pensamos en la contraparte de la oposición, débil y desarticulada, además de fragmentada, y sujeta a

las consecuencias del pacto político entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, candidato del Partido Liberal, presidente entre 1997 y 2002, y posteriormente juzgado y condenado a veinte años de cárcel por diversos delitos de corrupción, entre ellos el lavado de dinero.

Durante los últimos diez años, este panorama ha estado dominado por este pacto político que ha provocado dos reformas sustanciales a la Constitución, para repartir entre incondicionales de ambos magistraturas y puestos colegiados, y lo peor, para abrirle las puertas de la elección a Ortega, al rebajar al 35% el porcentaje de votos necesarios para ganar en primera vuelta, que fue como consiguió la presidencia en 2006, siempre imposibilitado de alcanzar la mitad más uno de los sufragios en todas las elecciones anteriores en las que se presentó infructuosamente.

Ahora Alemán, exonerado de todo cargo por la Corte Suprema de Justicia, gracias al pacto mismo con Ortega, es el candidato único de su partido para las elecciones de 2011, a pesar de ser el político con más altos niveles de rechazo popular en todas las encuestas; y lo más probable es que los veamos competir contra Ortega en unas elecciones marcadas por la desesperanza y la apatía, que este último nunca dejaría perder bajo su decisión de quedarse para siempre, y que sólo marcarían la continuidad de un sistema viciado, pues Alemán conservaría su vieja cuota de poder.

Las salidas verdaderas hacia el restablecimiento del sistema democrático no parecen fáciles de conseguir. Para empezar, lograr que se respete la Constitución Política, que prohíbe expresamente la reelección de Ortega. Y se necesitaría la sustitución total de los miembros del actual Consejo Supremo Electoral por personas honestas e independientes; una nueva ley electoral, o reformas profundas a la misma, que asegure el empadronamiento indiscriminado de los ciudadanos y la transparencia del sistema de votaciones, y una amplia y numerosa observación tanto de organismos nacionales como internacionales, que fiscalice el proceso y evite cualquier manifestación de fraude.

Nada de eso puede lograrse sin una amplia movilización de las fuerzas democráticas, imponiéndose a las amenazas de represión en las calles, y una gran alianza de partidos y organizaciones de la sociedad civil bajo el liderazgo de rostros nuevos que despiertan esperanzas e inspiren confianza a los votantes, que en las encuestas rechazan abrumadoramente al gobierno de Ortega y sus pretensiones de continuismo, pero que buscan alternativas lejos de los viejos rostros del pasado.

Pero mientras tanto, la actitud de la comunidad internacional no puede ser de indiferencia, mientras nace de nuevo una dictadura en Nicaragua, en negación de los principios democráticos, en pleno siglo veintiuno. Estamos frente a un asunto de fondo, que tiene que ver con la futura estabilidad de Centroamérica, países que forman todo un sistema de vasos comunicantes, y que no es ajeno tampoco a la suerte del continente, por mucho que Nicaragua sea un país pequeño y de una economía poco significativa. No hay que olvidar que hace tres décadas, la lucha para librarse de la dictadura de Somoza conmovió no sólo a América Latina, sino al mundo.

Como se ve, no se trata nada más de ruido en las calles, y ataques esporádicos con palos y piedras, y ventanales destruidos a morterazos. Se trata de la supervivencia de la democracia en un país atacado cíclicamente por el mal de las dictaduras a largo plazo.

Matasepe, junio de 2010